

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS

**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO Y PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

P. ¿Cómo surge la iniciativa de un anteproyecto de ley sobre derecho internacional privado para la República Dominicana?

R. Los orígenes de los procesos legislativos son, a veces, curiosos y sorprendentes. Este anteproyecto deriva de una actividad docente que se realizó hace ya unos años en la Universidad Complutense de Madrid, dentro del Máster de Derecho de los Negocios Internacionales, donde participaron alumnos de distintos países. Uno de los temas era el de la práctica de casos de derecho internacional privado. En el máster los alumnos debían resolver un supuesto práctico con arreglo a sus leyes nacionales, y los alumnos dominicanos, que eran bastantes, se encontraron con que no

tenían soluciones para el caso conforme al derecho dominicano y se sintieron un tanto incómodos frente a las respuestas que los alumnos de los países de su entorno hallaban en sus ordenamientos.

Esos alumnos, que ya han alcanzado un apreciable nivel profesional ocupando cargos importantes, no olvidaron aquella poco grata situación y volvieron a insistir en esta importante carencia normativa, proponiendo al efecto un ciclo de conferencias de derecho internacional privado para debatir la conveniencia de llenar este vacío legal, eligiendo el marco de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) para llevar a cabo la iniciativa. A partir de esas conferencias, presididas por el

entonces presidente Leonel Fernández, surgió la necesidad de preparar un anteproyecto de ley pensado y enfocado desde la perspectiva de los intereses dominicanos y en el marco de las importantes reformas legislativas que se están produciendo en la República.

P. ¿Quiénes integran la comisión que usted coordina y que trabaja actualmente en los preparativos de esa propuesta?

R. Es una comisión plural integrada por el magistrado Édynson Alarcón (el autor de esta entrevista), juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el licenciado Julio César Valentín, senador por Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados; el doctor Marco Herrera, director

A middle-aged man with dark hair, a mustache, and black-rimmed glasses is the central figure. He is wearing a dark navy blue suit jacket over a light blue dress shirt and a diagonally striped tie in shades of blue and brown. He is holding a large, open book with a red cover, looking down at it with a focused expression. His left hand rests on the pages, and a silver watch is visible on his left wrist. The background is a library or study, with tall bookshelves filled with books. Some books have colorful spines, and others are in blue folders. A window with horizontal blinds is visible behind him, letting in soft light. The overall atmosphere is professional and scholarly.

Entrevista

ejecutivo de Funglode y socio fundador del Despacho Jurídico SDHH Law; el doctor Marcos Peña, socio fundador del Despacho Jurídico Jiménez, Cruz, Peña (JCP) y expresidente de la Cámara de Comercio Británica – Dominicana; la doctora Fabiola Medina, expresidenta del Centro de Resolución de Conflictos (CRC) de la Cámara de Comercio y socia fundadora del Despacho Jurídico

Medina y Rizek; el doctor Mario Pujols, Comisionado de la Comisión Reguladora de las Prácticas Desleales en el Comercio y Salvaguardas, Socio Fundador del Despacho Jurídico Pujols & Canals; la doctora Leidylin Contreiras, abogada de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; Víctor Villanueva, miembro del Consejo Académico del Instituto Global de Alto Estudios

en Ciencias Sociales (IGLOBAL); Ana Carolina Blanco Haché, investigadora en las áreas de Derecho y Relaciones Internacionales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y Nathanael Concepción perteneciente a también a esta última entidad y miembro honorario del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales (CDRI). Como se puede observar, todo un amplio elenco de personas que, desde distintas posiciones en su actividad, se encuentran con problemas de derecho internacional privado. Son problemas que se plantean los jueces, los empresarios, los abogados, los notarios... De ahí el carácter variado de la Comisión.

P. ¿Podría resumir para los lectores de *Gaceta Judicial* por qué, a su modo de ver, la República Dominicana necesita una ley de Derecho internacional privado?

R. Cuando un país se introduce en el mercado precisa una serie de disposiciones legales que antes no eran necesarias. En España, por ejemplo, hace muchos años no había normas de derecho internacional privado porque no existían prácticamente relaciones privadas de carácter transfronterizo. Cuando España se introdujo en el mercado, se produjeron grandes cambios desde el punto de vista de desarrollo del turismo, de los movimientos migratorios y de entrada de las inversiones extranjeras que condujeron a la búsqueda de un sistema normativo capaz de responder a todos estos retos. *Mutatis mutandi*, fue una situación parecida a la que atraviesa actualmente la República Dominicana. Se trata de un país que cuenta con un desarrollo turístico muy grande, que recibe un volumen de inversión extranjera considerable, que está fuertemente involucrado en movimientos migratorios... y que, paradójicamente, no cuenta con una normativa que dé respuesta a estas cuestiones. Una ley que reconozca las necesidades genuinamente dominicanas y que respon-





da puntalmente a estos problemas es imprescindible, y para ello el legislador ha de ofrecer respuestas que, teniendo en cuenta las soluciones que se han adoptado en otros países, sean válidas aquí tras haber sido adaptadas al sistema jurídico dominicano. En este punto las experiencias que aporta el derecho comparado deben valorarse con cierta prudencia: no es lo mismo el sistema que hay en Francia, país cuyos problemas transfronterizos son muy distintos, que el que necesita la República Dominicana.

P. ¿Cuáles serían los ejes más importantes que se privilegiarían en la estructura general del anteproyecto?

R. El anteproyecto gira en torno a tres problemas: determinación de la competencia de los tribunales dominicanos, designación de la ley aplicable en los asuntos con elemento extranjero y reconocimiento y ejecución de deci-

siones pronunciadas en el extranjero. Unos problemas que, como se ha indicado, son objeto de una regulación altamente insuficiente y se encuentran ubicados en cuerpos legales diversos, lo que suscita serios problemas en orden a la respuesta articulada de las soluciones en presencia. El problema jurisdiccional busca determinar hasta qué punto son competentes los tribunales dominicanos para atender asuntos conectados con relaciones con otros países; esto es, cuando hay un matrimonio entre una dominicana y un español, por ejemplo, el tribunal que va a entender del divorcio, qué tribunal va a decidir de los alimentos, en fin, un problema jurisdiccional. En segundo lugar, el anteproyecto da respuesta a la cuestión de qué ley se aplica a estas relaciones; por ejemplo, cuando se adopta un niño en la República Dominicana, qué ley se aplica a la adopción, cuál a los efectos de esa adopción, etcétera. Y en tercer lugar, regu-

la el reconocimiento de actos jurídicos consolidados en el extranjero. Sobre esta última materia ya hay normas en la República Dominicana; no se trata de cambiarlas, sino de acomodarlas a una regulación integral porque lo que intenta el anteproyecto es dejar todo lo que es válido sin modificar, y no crear normas innecesarias o contradictorias. Por ejemplo, en otros países el arbitraje está dentro de la ley de derecho internacional privado, pero el anteproyecto lo excluye. Desde un punto de vista de técnica legislativa, el arbitraje es una cosa y el derecho internacional privado es otra.

P. ¿Es como poner un poco de orden en casa y enriquecernos con las experiencias que usted nos pueda traer en este proyecto en el cual nos hemos embarcado?

R. Las experiencias hay que situarlas en su contexto. En la República Dominica-

Entrevista

na somos herederos de Francia y esa es una herencia importante, un patrimonio jurídico del que nos sentimos muy orgullosos. Pero Francia ha cambiado su sistema hace muchos años, sobre todo como consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea. Nosotros no podemos pretender mantener un sistema que ya en Francia ha cambiado hace años. La experiencia francesa ha sido enriquecedora pero leyendo la jurisprudencia dominicana se observa que hay problemas muy particulares en nuestro país hacia los que hay que mostrar una especial sensibilidad. En estos momentos se está pensando en una ley modelo para el Caribe de derecho internacional privado y ¿por qué no va a ser la ley dominicana proyectada el modelo a seguir? Si hace casi un siglo los cubanos aportaron el Código Bustamante, ¿por qué no van a ser los dominicanos quienes aporten este modelo para todos los países de esta zona? Me consta que la iniciativa dominicana goza de gran predicamento, sin duda el más alto, entre los juristas que en el seno de la OHADAC, una organización de unificación jurídica caribeña, auspiciada por Francia, trabajan en estas cuestiones.

P. Dentro de todo esto, ¿dónde queda el Código Bustamante, del cual es signatario el Estado dominicano? ¿Qué se supone debe ocurrir con él en el futuro inmediato antes o luego de que entre en vigencia una ley dominicana de derecho internacional privado? ¿Podrían ambas piezas quizás coexistir?

R. No es verosímil. El Código Bustamante es un monumento jurídico, pero como toda obra humana tiene en la historia su momento de gloria y su decadencia. Es cierto que existe en la República Dominicana el mito del “Código Bustamante”, pero la doctrina extraída de los tribunales dominicanos muestra cómo este importante instrumento que, no lo olvidemos, es un tratado internacional de alcance muy reducido, no ha tenido una aplicación práctica significativa limitándose a ser una refe-

